

En la sesión extraordinaria efectuada el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente:

Acuerdo recaído a las consultas realizadas por el ciudadano Alberto Padilla Camacho, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto.

ANTECEDENTE:

Consulta presentada por Alberto Padilla Camacho

El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, se presentó en la Oficialía de Partes de este Instituto un escrito signado por el ciudadano Alberto Padilla Camacho, representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto Electoral, mediante el cual realiza las siguientes consultas:

“[...]”

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en lo establecido en el artículo 92 fracción XXVI, de la Ley Electoral Local atentamente solicito de este Consejo Local, me indique:

- 1. Es posible registrar y que el registro sea otorgado por el Instituto Electoral del Estado a través de su consejo General, a alguna persona como candidato a la presidencia municipal, si previo a su registro tuvo en años anteriores la calidad de servidor público municipal y fue sujeto a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en el cual el Ayuntamiento correspondiente emitió resolución en el que se le impuso como sanción un año de inhabilitación para ejercer el servicio público, y el ex funcionario público municipal que pretendemos registrar como candidato interpuso demanda de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa TJA, solicitando la suspensión de la inhabilitación y en el que dentro del acuerdo de radicación del TJA se le **negó la suspensión de la inhabilitación**, por lo que la inhabilitación se considera vigente desde el día en que se le notificó, siendo el 30 de noviembre del 2017.*
- 2. Asimismo en diverso un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, por hechos distintos, también seguido ante la contraloría municipal en el Ayuntamiento emitió resolución donde se le impone una sanción de **un año de inhabilitación para ejercer el servicio público**, resolución que no ha sido recurrida ante el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que pudiera sostenerse que al momento la sanción que consiste en inhabilitación se encuentra jurídicamente vigente desde el día en que se le notificó, aun cuando no ha vencido el termino para acudir al juicio de nulidad.*
- 3. Es necesario que los candidatos a Diputados al Congreso e integrantes de ayuntamientos que busquen reelegirse en sus cargos soliciten licencia para participar en campañas electorales.” (sic).*

CONSIDERANDO:

Organización de elecciones

1. De conformidad con el artículo 31, párrafo segundo, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realizará a través del organismo público electoral local y por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley.

Ordenamiento legal aplicable

2. Asimismo, el ordenamiento legal aplicable al proceso electoral ordinario local 2017-2018 en el estado de Guanajuato, es la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Personalidad y principios que rigen al IEEG

3. El artículo 77, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y que gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. De igual manera, se señala que será profesional en su desempeño y se regirá por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.

Asimismo, se estipula que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es autoridad en la materia electoral, en los términos que establece la Constitución Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución del Estado y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Órgano de dirección del IEEG

4. El artículo 81 de la ley comicial local señala que el Consejo General es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, al que corresponde la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales de carácter estatal.

Integración del Consejo General

5. El artículo 82, párrafo primero, del citado ordenamiento, indica que el Consejo General estará integrado por una consejera o consejero presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro nacional y estatal, quienes concurrirán a las sesiones solo con derecho a voz.

Facultades del Consejo General para responder consultas

6. De conformidad con el artículo 92, fracción XXVI, de la ley electoral local, es atribución del Consejo General desahogar las dudas que se le presenten sobre la aplicación e interpretación de la propia ley.

***Respuesta a las consultas formuladas
por Alberto Padilla Camacho***

7. Del escrito a que se hace referencia en el antecedente III, se advierte que se plantean tres consultas, que en lo medular, consisten en lo siguiente:

- a) Si es posible registrar como candidato a la presidencia municipal a un ciudadano a quien se le impuso la sanción administrativa consistente en inhabilitación, la cual se encuentra *sub judice*.
- b) Si es posible registrar como candidato a la presidencia municipal a un ciudadano a quien se le impuso la sanción administrativa consistente en inhabilitación, la cual no ha sido impugnada pero no ha vencido el plazo legalmente previsto para tal efecto.
- c) Si los diputados e integrantes de ayuntamientos que pretendan la reelección consecutiva deben solicitar licencia.

Con la finalidad de dar respuesta a las consultas que nos ocupan, este Consejo General, señala:

a) Respecto a la primera consulta, relativa a si es posible registrar como candidato a la Presidencia Municipal a un ciudadano a quien se le impuso la sanción administrativa consistente en inhabilitación, la cual se encuentra *sub judice*; este Consejo General considera que sí es posible, atendiendo a lo siguiente:

El artículo 110 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, establece que para ser presidente municipal, se requiere, entre otros requisitos, ser ciudadano guanajuatense en ejercicio de sus derechos.

En este sentido, la sanción administrativa consistente en la inhabilitación para ocupar cargos públicos implica un impedimento absoluto para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un tiempo determinado y encuentra sustento constitucional en el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el cual, la ley fijará los casos en que se pierdan o se suspendan los derechos de los ciudadanos; de manera que dicha sanción constituye una limitante a la esfera de derechos de la ciudadana o ciudadano a quien le haya sido impuesta, lo cual produce su inelegibilidad para acceder a cargos públicos, ya que la elegibilidad, puede considerarse coincidente con la capacidad para ejercer el sufragio pasivo y para ejercer el cargo respecto del cual, en su caso, resulte electo.

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido que los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a ellos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, y que por tal motivo, toda interpretación y correlativa aplicación de una norma jurídica debe ampliar sus alcances para potenciar su ejercicio; tal como se advierte en la siguiente jurisprudencia:

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. (Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido Político Nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 27 y 28.)

En este contexto, la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó en sesión pública celebrada el diez de octubre de dos mil doce, el siguiente criterio interpretativo:

SUSPENSIÓN DE DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. TRATÁNDOSE DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS, SÓLO PROCEDE CUANDO EXISTA RESOLUCIÓN FIRME.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, 20, apartado B, fracción I, 35, fracción II, 38, fracción II, 41, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, apartado 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14, apartado 2, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la presunción de inocencia es aplicable a los procedimientos administrativos, por lo que no es dable imponer las consecuencias de una infracción, hasta en tanto no se determine la responsabilidad en resolución firme. En este contexto, los derechos político-electorales del ciudadano, no pueden estimarse suspendidos con motivo de una sanción de inhabilitación que se encuentra *sub iudice*, en virtud de que, en ese caso, al no haber quedado firme la responsabilidad que se le atribuye como infractor, no pueden entenderse suspendidos sus derechos político-electorales, ya que además se trata de derechos humanos que deben interpretarse en la forma que le resulte más favorable. (Partido Revolucionario Institucional vs Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, Jalisco. Tesis XXVII/2012. Quinta Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-168/2012.—Actor: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—26 de septiembre de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Dávila Calderón y Jorge Alberto Orantes López. La Sala Superior en sesión pública celebrada el diez de octubre de dos mil doce, aprobó por unanimidad de cinco votos la tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 5, Número 11, 2012, páginas 45 y 46).

Como se advierte de la anterior transcripción, al resolver el recurso de reconsideración con número de expediente SUP-REC-168/2012, la referida Sala Superior determinó que la presunción de inocencia es aplicable a los procedimientos administrativos, por lo que no es dable imponer las consecuencias de una infracción hasta en tanto no se determine la responsabilidad en resolución firme; asimismo, estableció que los derechos político-electorales del ciudadano, no pueden estimarse suspendidos con motivo de una sanción de inhabilitación que se encuentra *sub iudice*, en virtud de que al no haber quedado firme la responsabilidad que se le

atribuye no pueden entenderse suspendidos sus derechos político-electorales, ya que además se trata de derechos humanos que deben interpretarse en la forma que le resulte más favorable.

El criterio de este Consejo General es coincidente con el del órgano judicial mencionado, pues no puede soslayarse la posibilidad de que, con motivo del medio impugnativo que se haya interpuesto en contra de la resolución que impuso la sanción administrativa consistente en inhabilitación, ésta quede sin efecto; supuesto en el cual, si se hubiera negado el registro de la candidatura, se habría cometido una violación irreparable a los derechos político-electorales de la o del ciudadano de que se trate.

En efecto, el derecho político-electoral del ciudadano a ser votado es un derecho fundamental de base constitucional, por lo que mientras no exista una determinación ejecutoria por parte de alguna autoridad en la que haya sido probada plenamente la responsabilidad de un ciudadano y que esto conlleve a que se le restrinja el ejercicio de ser votado, en su vertiente de acceder al desempeño de un cargo en el servicio público, por no tener las calidades establecidas en la ley, debe prevalecer ese derecho político electoral, con base a la presunción de inocencia.

b) En cuanto a la segunda consulta relativa a si es posible registrar como candidato a la Presidencia Municipal a un ciudadano a quien se le impuso la sanción administrativa consistente en inhabilitación, la cual no ha sido impugnada pero no ha vencido el plazo legalmente previsto para tal efecto; este Consejo General considera que sí es posible, atendiendo a lo siguiente:

De conformidad con las consideraciones expuestas al dar respuesta a la primera consulta, así como los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación que han sido invocados y el principio de presunción de inocencia, debe privilegiarse una interpretación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato que garantice la protección más amplia a los derechos fundamentales de las personas, por lo que en el supuesto que nos ocupa podrá otorgarse el registro de la candidatura.

Máxime que mientras no haya vencido el plazo legalmente previsto para impugnar la resolución de que se trate, no puede considerarse que la misma sea firme, lo cual es razón suficiente para no restringir el ejercicio de los derechos político-electorales, pues como ya se apuntó, las violaciones que, en caso contrario, se podrían cometer en perjuicio de la ciudadana o del ciudadano de que se trate, no podrían ser reparadas por esta autoridad administrativa electoral.

c) Finalmente, en relación con la tercer consulta, relativa a si los candidatos a diputados e integrantes de ayuntamientos que pretendan la elección consecutiva deben solicitar licencia para participar en las campañas electorales, se indica que el artículo 11 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, establece que:

- Los diputados y presidentes municipales, que se encuentren en ejercicio de sus funciones y pretendan su elección consecutiva, deberán solicitar licencia a más tardar un día antes del inicio de la campaña electoral respectiva, de conformidad con las leyes orgánicas del Poder Legislativo y Municipal respectivamente; y
- Para efectos de la elección consecutiva, los síndicos y regidores, no requerirán separarse de su cargo.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 párrafos primero y segundo, 81, 92 fracción XXVI, y 318 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se somete a la consideración del Consejo General, el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. En los términos precisados en el considerando 7 de este acuerdo, se da respuesta a las consultas formuladas por Alberto Padilla Camacho, representante suplente del Partido Acción Nacional ante este Consejo General.

SEGUNDO. Con copia certificada de este acuerdo, notifíquese al Partido Acción Nacional a través de su representante ante este Consejo General, en caso de que no haya asistido a la sesión en que se aprueba este acuerdo.

TERCERO. Se autoriza a la Secretaria Ejecutiva para que, en lo subsecuente, en estricta aplicación de los criterios emitidos en este acuerdo, dé respuesta a las consultas que se formulen a este Consejo General.

Notifíquese por estrados.

Con apoyo en lo previsto por los artículos 93, fracción IV, y 98, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, firman este acuerdo el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y la Secretaria Ejecutiva del mismo.

El presente acuerdo fue aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, por mayoría de cinco votos de las Consejeras y Consejeros Electorales Beatriz Tovar Guerrero, Luis Miguel Rionda Ramírez, Antonio Ortiz Hernández y Santiago López Acosta y el Consejero Presidente Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, y con el voto en contra de las Consejeras Electorales Indira Rodríguez Ramírez y Sandra Liliana Prieto de León, quien agrega voto particular.